



Consejo de Seguridad

Distr. general
27 de junio de 2005
Español
Original: inglés

Carta de fecha 27 de junio de 2005 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por la Presidenta del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1373 (2001) relativa a la lucha contra el terrorismo

El Comité contra el Terrorismo ha recibido el quinto informe de la Argentina, presentado de conformidad con el párrafo 6 de la resolución 1373 (2001) (véase el anexo). Le agradecería que tuviera a bien hacer distribuir la presente carta y su anexo como documento del Consejo de Seguridad.

(Firmado) Ellen Margrethe Løj
Presidenta del Comité del Consejo de Seguridad
establecido en virtud de la resolución 1373 (2001)
relativa a la lucha contra el terrorismo



Anexo

[Original: español]

**Carta de fecha 23 de junio de 2005 dirigida a la Presidenta del
Comité contra el Terrorismo por el Representante Permanente
de la Argentina ante las Naciones Unidas**

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Excelencia en respuesta a la nota de fecha 22 de febrero de 2005 del Comité contra el Terrorismo, mediante la cual se solicita información adicional a la presentada por la Argentina en su cuarto informe al Comité el 19 de abril de 2004.

En respuesta a dicha nota, se adjunta a la presente el quinto informe de la República Argentina, con la información adicional requerida (véase el apéndice).

En espera de que el Comité encuentre suficiente esta información adicional, quedo a su disposición para cualquier consulta que pudiera tener al respecto.

(Firmado) Cesar **Mayoral**
Embajador
Representante Permanente

Apéndice*

[Original: español/inglés]

Por nota S/AC.40/2005/MS/OC.481 de fecha 22 de febrero de 2005, el Presidente del Comité contra el Terrorismo establecido por Resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hizo llegar al Gobierno argentino comentarios y preguntas motivados por el cuarto informe presentado por la República Argentina en cumplimiento de lo establecido en el párrafo 6 de la mencionada resolución y que fuera oportunamente publicado como documento del Consejo de Seguridad S/2004/323. Dichos comentarios y preguntas se refieren a las normas legislativas vigentes y en curso de adopción, así como a la implementación de medidas de carácter operativo tendientes a la aplicación de la Resolución 1373 (2001).

A continuación se acompañan las respuestas a los interrogantes planteados por el Comité de acuerdo al orden presentado en la mencionada nota.

I. MEDIDAS DE APLICACION:

1.1. En la página 4 del tercer informe de la Argentina se hacía referencia a unos proyectos de ley en curso de elaboración por los que se modificaban el Código Penal y la Ley sobre el encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo a fin de que la Argentina cumpliera cabalmente las condiciones legislativas que exigía la aplicación de la resolución. También se indicaba que esas medidas permitirían que la Argentina pasara a ser parte en el Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo. El Comité agradecería que la Argentina le pusiera al día sobre el estado de preparación de la legislación propuesta y le informara de las medidas subsiguientes adoptadas por la Argentina para fortalecer su capacidad en materia de lucha contra el terrorismo y sus modalidades de cooperación con otros Estados para combatir el terrorismo.

1.1.1. Estado de la Legislación Propuesta:

El 30 de marzo de 2005, por Ley 26.024, el Congreso de la Nación aprobó el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo y se han iniciado los trámites para su ratificación. De esta manera, la República Argentina se convertirá en parte de los doce convenios celebrados en el ámbito de las Naciones Unidas para la lucha contra el terrorismo que actualmente se encuentran en vigor.

* Los anexos pueden consultarse en la Secretaría.

En el ámbito interamericano, se destaca la aprobación legislativa por Ley 26.023 del 30 de marzo de 2005, de la Convención Interamericana contra el Terrorismo, que complementa y refuerza en el plano regional las obligaciones asumidas en virtud de los convenios celebrados en el ámbito de las Naciones Unidas.

La aprobación legislativa del convenio coincide con las recientes recomendaciones realizadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Lavado de Activos (GAFI), conforme a las cuales la República Argentina debería realizar diversas medidas de adecuación legislativa, entre las que cabe mencionar la tipificación penal autónoma del delito de financiación del terrorismo y del lavado de activos, delito éste que debería tener un régimen penal diferenciado del encubrimiento.

Al respecto, en el ámbito del Poder Legislativo, se ha avanzado en el tratamiento de un proyecto de ley para modificar los artículos 277 (encubrimiento) y 278 (lavado de activos) del Código Penal. Dicho proyecto ha sido aprobado por la Cámara de Diputados el 1° de junio de 2005, y pasó al Senado de la Nación, para ser convertido en ley. Se acompaña el texto de dicho proyecto en Anexo 2

El problema se suscita por cuanto, conforme al inciso 4 del artículo 277, están exentos de responsabilidad criminal los que hubieren obrado en favor del cónyuge, de un pariente cuyo vínculo no excediere del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o de un amigo íntimo o persona a la que se debiese especial gratitud. Por consiguiente, lo que se procura es suprimir la aplicación de las referidas excepciones, propias del delito de encubrimiento, a los supuestos de delito del lavado de activos. De esta forma, el lavado de activos siempre será punible, cualesquiera sean las relaciones personales entre el autor del delito de lavado de activos y el autor del delito determinante.

En este orden de ideas, el mismo proyecto propicia la inoponibilidad del secreto bancario, profesional u otro conexo a la Unidad de Información Financiera (UIF), dependiente del Ministerio de Justicia. Asimismo, también se prevé que, en caso de reportar transacciones de carácter sospechoso, la UIF tendrá la facultad de remitir los antecedentes al Ministerio Público, a fin de que éste considere la promoción de las acciones penales correspondientes.

1.1.2. Medidas para Fortalecer la Capacidad en Materia de Lucha contra el Terrorismo:

La República Argentina ha implementado recientemente, mediante Decreto el 1.521/2004 del 3 de noviembre de 2004, un régimen jurídico que agiliza el procedimiento de aplicación en el derecho interno de las sanciones dispuestas por el Consejo de Seguridad.

De conformidad con lo establecido por el Artículo 1° del decreto, *"Las Resoluciones del CONSEJO DE SEGURIDAD que se adopten en el marco del Capítulo VII de la Carta de las NACIONES UNIDAS que decidan medidas obligatorias para los Estados Miembros, que no impliquen el uso de la fuerza armada, y conlleven sanciones, así como las decisiones respecto de la modificación y terminación de éstas, serán dadas a conocer por el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, a través de Resoluciones a publicarse en el Boletín Oficial"*. El Artículo 2, por su parte, dispone que *"En aquellos casos en que el CONSEJO DE SEGURIDAD o sus órganos subsidiarios identifiquen personas o entidades sujetas al régimen de sanciones previstas en las Resoluciones mencionadas en el artículo 1, del presente Decreto, el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO dará a conocer y actualizará los listados correspondientes a través de Resoluciones a publicarse en el Boletín Oficial"*.

Este decreto implicó una delegación de facultades en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, por cuanto, hasta su vigencia, era necesario un decreto específico del Poder Ejecutivo Nacional para proceder a la aplicación de las medidas dispuestas por el Consejo de Seguridad que no impliquen el uso de la fuerza armada. En cambio, a partir de la normativa actualmente en vigor, basta una resolución ministerial. Ello contribuirá, sin duda, a dar mayor celeridad al cumplimiento de los mandatos del Consejo en materia de lucha contra el terrorismo, en particular en lo referido a la aplicación de regímenes de sanciones que conlleven congelamientos de fondos a personas físicas y jurídicas así como, prohibiciones de viaje, etc.

1.1.3. Modalidades de Cooperación con otros Estados:

i) Tratados de Extradición y de Asistencia Jurídica Mutua:

El 30 de junio de 2004, por Ley 25.911, fue aprobado el Convenio entre la República Argentina y la República de El Salvador sobre Asistencia Jurídica en Materia Penal. En el mismo se dispone expresamente (Art. 10, párr. 5, inc f) que los actos de terrorismo no podrán ser considerados delitos políticos o

conexos con éstos, a los efectos de la denegación de la asistencia. Existen diversos tratados en proceso de negociación, en el marco de los cuales se procura adaptar sus normas a los parámetros previstos para tal materia en los convenios internacionales celebrados en el ámbito de las Naciones Unidas en materia de extradición y asistencia jurídica mutua, así como también en la Recomendaciones 36 a 39 del GAFI, por ejemplo no oposición del secreto bancario, no oposición del carácter fiscal de los delitos para denegar una extradición o asistencia jurídica.

ii) Cooperación judicial en relación con el atentado terrorista a la AMIA

En las investigaciones con motivo del atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina -AMIA-, ocurrido en Buenos Aires en 1994, informado por la República Argentina en el documento (S/2004/323), la causa que tramitó ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 9, Secretaría N° 17, caratulada "PASTEUR 633 ATENTADO (Homicidio-lesiones-daño)", pasó a tramitar por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 6, Secretaría N° 11, bajo el N° 8566/96, recaratulada "COPPE, JUAN CARLOS Y OTROS S/ASOCIACION ILICITA Y OTROS DELITOS – ATENTADO AMIA DAIA"

Parte de la causa fue elevada al Tribunal Oral Federal N° 3 para juicio oral y público, registrada bajo el N° 487/00, caratulada "TELLEDIN, CARLOS ALBERTO Y OTROS S/ HOMICIDIO CALIFICADO (atentado a la sede de la AMIA)". Con fecha 2 de septiembre de 2004, este Tribunal Oral dictó sentencia por la cual se decretan varias nulidades y se absuelve de culpa y cargo a una serie de personas procesadas en dicha causa.

A partir del último trimestre de 2004, la investigación del caso ha quedado a cargo de una Unidad Fiscal creada especialmente para ello, en el ámbito de la Procuración General de la Nación.

Las órdenes de captura internacional dictadas respecto de ciudadanos iraníes, relacionados con la investigación del atentado fueron ratificadas por el actual magistrado interviniente, por lo que estas órdenes de captura se encuentran vigentes.

Se ha continuado, en materia de cooperación judicial, con la remisión de exhortos a distintos países, entre otros, Alemania, Arabia Saudita, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, España, Francia, Iran, Israel, Italia, Kuwait, Líbano, Paraguay, Panamá, Portugal, Reino Unido, Sudáfrica, Siria, Uruguay y

Venezuela. Se han recibido respuestas totales o parciales mientras que otros están aún pendientes, por caso, cuatro de los seis exhortos remitidos a Iran siguen pendientes de ser recibidos por la Cancillería local.

iii) Cooperación entre Organismos Administrativos:

En el orden internacional, haciendo uso de las atribuciones conferidas por el inciso 9 de la Ley N° 25.246, y con la finalidad de consolidar iniciativas tendientes a la prevención del lavado de activos, la UIF suscribió catorce convenios de cooperación para el intercambio de información con las UIFs de los siguientes Estados: Paraguay, Chile, Australia, Bélgica, Brasil, Honduras, Perú, Bolivia, Colombia, El Salvador, España, Guatemala, Panamá, Venezuela.

Asimismo, a fines de 2003, la UIF ingresó al Grupo Egmont, creado en 1995, con la finalidad de articular vínculos y mecanismos de cooperación para el intercambio de información y de experiencias en materias relativas a la capacitación, en asuntos de infraestructura tecnológica y de las comunicaciones, de elaboración de tipologías y nuevas tendencias del delito, etc.; todo ello en procura de optimizar el funcionamiento de los sistemas de prevención contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo de los países que conforman dicho grupo. Esto le permitió a la UIF acceder a la Red Segura de Egmont (Egmont Secure Web - ESW), a través de la cual se realizan intercambios de información de manera segura. Actualmente participan de la ESW noventa y cuatro UIFs, con las cuales el organismo argentino tiene la posibilidad de intercambiar información destinada a la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

En el marco de los convenios de intercambio anteriormente mencionados, y de la ESW, la UIF realizó, durante el transcurso de 2004, 24 requerimientos de información a organismos análogos de otros Estados y recibió 38 solicitudes de tales organismos.

1.2. Además, la Argentina indicó en su segundo informe que la Comisión interministerial establecida para examinar el derecho argentino a fin de determinar si se adecuaba a las exigencias internacionales derivadas de los convenios y protocolos internacionales de lucha contra el terrorismo concluyó que, en una amplia mayoría, los actos proscritos en dichos convenios ya se encontraban tipificados en las leyes argentinas. El Comité agradecería que la Argentina le presentara una sinopsis de las leyes pertinentes, concretamente en lo que se refiere a su aplicación a las distintas actividades en cuestión, así como de todos los instrumentos

legislativos que se hayan propuesto para hacer efectivas las leyes de la Argentina, si no estaban ya contemplados en el derecho nacional.

1.2.1. Normas Legislativas:

Las obligaciones contenidas en los instrumentos internacionales aparecen satisfechas en la legislación nacional vigente, tanto en el aspecto sustantivo como en materia de extradición y asistencia judicial. En este último ámbito las disposiciones de la ley N° 24.767 de cooperación internacional en materia penal se manifiestan suficientes para la implementación de los tratados. También se encuentran en consonancia con la normativa internacional los diferentes aspectos regulatorios y operativos, referidos, entre otras cuestiones, a la navegación aérea y la protección física de materiales nucleares. Dichos aspectos se encuentran comprendidos en el derecho nacional a nivel tanto legislativo como reglamentario.

Se acompaña como anexo I, una sinopsis comparativa de las convenciones internacionales contra el terrorismo y la legislación penal de la República Argentina.

La excepción está constituida, como ya se ha señalado, por la necesidad de tipificar como figura penal autónoma la financiación del terrorismo, de conformidad con el Convenio Internacional sobre la materia, que obliga a los Estados a tipificar la provisión o recolección de fondos para ser destinados a la comisión de algunas de las conductas previstas en los demás tratados antiterroristas vigentes, y a considerar a los actos terroristas como delito determinante del lavado de dinero.

Si bien la financiación de un acto de terrorismo se vería usualmente cubierta por las reglas previstas en el título 7° del primer libro del Código Penal, referido a la participación criminal, tanto el Convenio como la Resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad obligan a tipificar la financiación con independencia de que el acto principal se lleve a cabo. Por este motivo, en el proyecto de ley al que se ha hecho referencia en el punto 1.1. *supra*, el Poder Ejecutivo incluirá la tipificación penal autónoma del delito de financiación del terrorismo.

Por otra parte, como ya se ha señalado en el referido punto 1.1., se ha realizado la aprobación legislativa y se prevé la consiguiente ratificación del Convenio contra la Financiación del Terrorismo lo cual sumado a la adopción de la referida legislación en el orden interno, permitirá completar el proceso de

adecuación normativa a las obligaciones internacionales asumidas por la República.

1.2.2. Medidas Operativas:

i) En materia Migratoria:

La Dirección Nacional de Migraciones informó que entre las medidas adoptadas se profundizó el procedimiento para la detección de documentación fraudulenta en los pasajeros que pretendan ingresar o egresar del país. Durante el año 2004, en el área metropolitana de Buenos Aires fueron detectadas 210 personas con documentación apócrifa, de los cuales 121 fueron puestas a disposición de la justicia y el resto, rechazado a su país de procedencia. Por otra parte, se trabajó en la evaluación de perfiles de pasajeros que permitieron, en muchos casos, determinar la verdadera nacionalidad de los mismos. Ello permitió determinar casos de falsedad ideológica en la documentación (v. gr. el soporte material del documento era genuino pero la información contenida era falsa).

La implementación del sistema informático SIGER (Sistema Integral de Gestión de Restricciones), permitió contar con una base de datos más amplia, en especial en alertas y capturas nacionales e internacionales e informes relativos a robos de documentación. De manera complementaria, la previsión de la puesta en funcionamiento del sistema biométrico traerá aparejado enlaces y cruce de información directa con distintos países. En efecto, al momento de constatar el tránsito de ingreso o egreso, se procederá obtener la huella dactilar y fotografía del pasajero; información que podrá ser cotejada con organismos de seguridad internos y externos.

ii) En materia de Entidades Financieras:

El Banco Central de la República Argentina, siguiendo las recomendaciones del GAFI, adecuó el formato de las disposiciones aplicables en la esfera de su competencia, aprobando las normas sobre "Prevención del financiamiento del terrorismo" (Comunicaciones "A" 4273 y "C" 40646).

Asimismo y con el fin de obtener una mayor celeridad y eficiencia en el control llevado a cabo respecto de las entidades que se encuentran bajo la órbita del Banco Central, dicho organismo ha instruido a las entidades financieras y cambiarias acerca de la obligación de congelar de inmediato e informar sobre la existencia o inexistencia de activos financieros depositados, y

cualquier otro tipo de operaciones (incluyendo giros y transferencias) efectuadas o que intenten efectuar los titulares que figuren en listas procedentes del Consejo de Seguridad, difundidas a través de Resoluciones adoptadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y publicadas en el Boletín Oficial, así como por las personas y entidades que actúen en nombre de esas personas y entidades o bajo sus órdenes, inclusive respecto de los fondos obtenidos o derivados de los bienes de propiedad o bajo control, directo o indirecto, de esas personas y de las personas y entidades asociadas a ellas. Ello deberá producirse dentro de las 48 horas hábiles de la citada publicación o bien desde el momento en que se registre la intención de alguno de los titulares comprendidos en dichas Resoluciones de realizar alguna transacción en las entidades del sistema (Comunicación "A" 4218).

Además, se considera de interés informar que, al 10 de marzo de 2005, el Banco Central recibió 666 reportes, de los cuales 180 fueron detectados por las distintas áreas de inspecciones de esta Institución, los restantes 486 fueron presentados por las entidades del sistema.

De estos reportes fueron presentados a las autoridades del Ministerio Público Fiscal 88 casos, a la Unidad de Información Financiera 273, mientras que otros 25 fueron archivados y permanecen en análisis 280 reportes

Estos reportes están vinculados a disposiciones relacionadas con la Prevención del Lavado de Dinero y otras Actividades Ilícitas (Com. "A" 3094 y complementarias) y Prevención del Financiamiento del Terrorismo (Com. "A" 4273). Cabe aclarar que si bien estas operaciones fueron informadas en el marco normativo antes mencionado, las mismas no indican una relación directa con el financiamiento del terrorismo, sino que son operaciones que por sus características resultan inusuales o sospechosas, correspondiéndole a las autoridades judiciales su encuadramiento jurídico.

iii) En materia de Seguros:

La Superintendencia de Seguros de la Nación ha analizado operaciones reportadas como sospechosas de lavado de activos provenientes de actividades delictivas, efectuando, a posteriori de los análisis practicados y en caso de corresponder, los reportes pertinentes a la Unidad de Información Financiera. Asimismo, se han efectuado análisis y verificaciones, respecto del mercado asegurador, ante requerimientos formales de la citada Unidad.

iv) En materia de Mercados de Valores:

La Comisión Nacional de Valores ha requerido a los Mercados de Valores, las Bolsas de Comercio, el Mercado Abierto Electrónico S.A., la Caja de Valores S.A., los Mercados de Futuros y Opciones, las Sociedades Gerentes y Depositarias de fondos comunes de inversión, los Fiduciarios Financieros y toda otra persona física o jurídica sujeta al contralor y fiscalización de dicho organismo, que en cumplimiento de los decretos del Poder Ejecutivo Nacional y Resoluciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, en materia de lucha contra el terrorismo que congelen sin demoras los fondos y otros activos financieros de las personas o entidades identificadas en los listados contenidos en las Resoluciones del Consejo de Seguridad, e informen a la Comisión Nacional de Valores dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes de producida, toda operación efectuada por las personas o entidades identificadas en los listados contenidos en las Resoluciones del Consejo de Seguridad comunicada por el el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

También, los sujetos mencionados precedentemente, deberán informar de inmediato a la Comisión respecto de la existencia de activos financieros por parte de cualquiera de los sujetos incluidos en los listados y extremar los recaudos de identificación del cliente y demás obligaciones contenidas en el Capítulo XXII "Prevención del Lavado de Dinero y Lucha contra el Terrorismo" de las Normas (N.T. 2001) de la Comisión Nacional de Valores.

v) La Unidad de Información Financiera:

La Unidad de Información Financiera (UIF) informó que, actualmente, cuenta con una base de datos, compuesta por información remitida por distintas entidades y organismos. La misma está integrada, entre otros datos por:

- Base de datos LAVDIN de Operaciones Financieras y Cambiarias. Desde junio de 2003, se vienen recibiendo los archivos establecidos por el Régimen de Control de Lavado de Dinero del Banco Central, enviados por 155 entidades bancarias, financieras y cambiarias. Al 30 de junio de 2004, esta base contenía aproximadamente 32 millones de registros.

- * Deudores del sistema bancario. Copia de la base pública que mantiene el Banco Central sobre personas deudoras del sistema, entidades acreedoras, monto y situación crediticia de las deudas.
- * Titulares de cuentas. Registro elaborado por la Dirección de Seguridad y Sistemas Informáticos de la Unidad de Información Financiera a partir de los movimientos bancarios, financieros y cambiarios, y de deudores del sistema bancario, detallando las entidades y sucursales en las que se encuentran las cuentas y se efectúan las operaciones.
- * Registro Nacional de Aeronaves. Copia de la base administrada por el Registro Nacional de Aeronaves, de la Dirección Nacional de Aeronavegabilidad, que contiene datos de todas las aeronaves matriculadas en el país y sus respectivos propietarios.
- * Transferencias al Exterior. Copia de la base de operaciones individuales de transferencias de dinero al exterior, elaborada en el marco de una investigación parlamentaria sobre fuga de capitales.
- * Ingreso de Divisas (viajeros que ingresan al país). Copia de la información remitida por la Dirección General de Aduana sobre las declaraciones juradas de viajeros que ingresan al país con más de U\$S 10.000 (diez mil dólares estadounidenses).

A su vez, la UIF cuenta con la posibilidad de realizar consultas específicas en bases de datos disponibles en otros organismos del Estado, tales como el Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, el Registro Nacional de Reincidencias y Estadística Criminal. También se han iniciado contactos con otros organismos de la Administración Pública, a fin de acordar con sus autoridades la posibilidad de acceder a la información almacenada en sus bases de datos, como así también mecanismos ágiles y/o abreviados de acceso. Entre estas instituciones, se destacan la Comisión Nacional de Valores, la Superintendencia de Seguros de la Nación, el Registro Nacional de las Personas, el Registro Nacional de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires y el Sistema de Identificación Nacional Tributaria y Social.

Debe destacarse un Convenio de Colaboración suscripto entre la UIF y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conforme al cual se establece, entre otras medidas, la posibilidad de requerir información a la Corte Suprema y acceder a consultar sus bases de datos, a fin de determinar la existencia de

causas relacionadas con la materia de competencia de la UIF, todo ello señalando que no existe secreto de la información para la Unidad. Este convenio fue ratificado en sesión plenaria y se formalizó como Resolución UIF N° 04/2004.

En cuanto a los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), se implementó un sistema que permite la carga de los datos contenidos en dichos informes, que son recibidos en formatos papel, y la posterior consulta o interrogación de la base por número de ROS, por nombre de la persona o personas mencionadas en dichos reportes, por número de documento, etc. En todos los casos, la disponibilidad de la información habilita la formación de interconexiones entre diversos casos almacenados en la base. En una segunda etapa, se proyecta la implementación de un programa que permita a los sujetos obligados a reportar a la UIF, cargar los datos directamente, generar el ROS y enviarlo a la Unidad por internet.

Al 28 de febrero de 2005, la UIF ha comunicado la realización de un total de 897 ROS, de los cuales 648 provinieron del sector financiero y cambiario, 93 de los emisores de fondos, 76 de la Administración Federal de Ingresos Públicos, 27 del sector de los seguros, 14 del Banco Central de la República Argentina, 11 de la Comisión Nacional de Valores, 5 de bingos, 5 de escribanos públicos, 1 de las transportadoras de caudales y 1 de sociedades de bolsa.

Asimismo, la UIF recibe, en el marco del desempeño de las labores que le fueran asignadas, información procedente de otras fuentes (dependencias de la Administración Pública, declaraciones voluntarias, etc.) que, si bien no representan Reportes de Operaciones Sospechosas, constituyen valiosos aportes que este organismo archiva en sus bases de datos, con la finalidad de conformar el Registro Público de Información previsto en el Artículo 15 de la Ley 25.246. La UIF ha informado un número total de 54 informes de esta naturaleza.

Por otro lado, según lo establece el Artículo 13 de la mencionada ley, la UIF colabora con la justicia en carácter de perito especializado en materia de lavado de activos, en las causas en que es requerida su intervención. En tal sentido, la UIF colabora con la justicia en más de 60 causas.

1.3. El Comité también agradecería que la Argentina le comunicara todos los exámenes o evaluaciones que lleve a cabo cualquier institución u organización internacional o regional acerca de la aplicación de la resolución, especialmente en relación con las medidas operacionales.

En el plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Lavado de Activos (GAFI) de febrero de 2005, el Presidente de dicho organismo emitió un informe, transmitido por carta del 24 de febrero de 2005 al Gobierno argentino. En el mismo destaca la necesidad de que la Argentina adopte las medidas de adecuación legislativa en materia de financiación del terrorismo y de lavado de activos (v. 1.1. *supra*), se refirió a una serie de medidas de carácter operativo.

El GAFI se refirió tanto a las medidas adoptadas por el Gobierno argentino, como las que aún se encuentran pendientes de adopción. En ese sentido, en el punto 1.2.2. *supra*, se ha reseñado las medidas adoptadas en el ámbito operativo por cada uno de los organismos responsables.

Entre las medidas operativas a las que se hace referencia en el informe del GAFI, se señalan las siguientes

i) Medidas relativas al proceso de recepción, análisis y difusión de información financiera y de otra inteligencia, en el plano interno e internacional:

En este caso, se han señalado *supra* las medidas en curso de adopción, por parte de la República Argentina, a fin de facilitar la investigación de potenciales casos de financiación del terrorismo, y de modificar las reglas de secreto y confidencialidad (v. lo informado en el punto 1.1.1. *supra*). También destacó la celebración de memoranda de entendimiento por parte de la UIF con organismos análogos de otros Estados (v. punto 1.1.3., ii *supra*), y el programa de intercambio de experiencias y estadísticas con otros organismos y sujetos informantes (v. punto 1.2.1, v *supra*).

ii) Atribuciones y poderes de las autoridades responsables del ejercicio de la acción penal y la aplicación de la ley:

En esta materia, se han señalado las medidas en curso de adopción a fin de facilitar la investigación de la financiación del terrorismo, así la adopción de mecanismos y la formación de equipos de investigación entre diversos organismos del Estado.

iii) Identificación de clientes en las transacciones comerciales, informe de actividades sospechosas:

Se han destacado las medidas adoptadas para determinar aquellos clientes o transacciones que impliquen un riesgo de lavado de activos, la armonización de parámetros aplicables a entidades financieras, la reconsideración de los parámetros aplicables al sector de los seguros y la identificación real de los beneficiarios o propietarios.

2. Asistencia Técnica:

2.1. *El Comité desea hacer hincapié una vez más en la importancia que atribuye a la prestación de asistencia y asesoramiento en relación con la aplicación de la resolución. A ese respecto, el Comité desea recordar a la Argentina que la Guía de información del Comité (www.un.org/sc/ctc) se actualiza con frecuencia para agregar información nueva y de interés sobre la ayuda disponible. El Comité agradecería recibir información de la Argentina respecto de los aspectos en que considere que podría beneficiarse de la asistencia, o respecto de los cuales esté en condiciones de presentar asistencia técnica a otros Estados en lo referente a la aplicación de la resolución.*

2.1.1. Actividades de capacitación organizadas por organismos del Estado argentino:

* La Organización de los Estados Americanos (OEA), por intermedio de la Comisión Interamericana para el Abuso de Drogas (CICAD), ha implementado, con el apoyo de la Unidad de Información Financiera (UIF), un proyecto denominado *“Capacitación de formadores de las agencias encargadas de hacer cumplir las leyes en materia de combate del lavado de activos y de financiamiento del terrorismo”*, en cuyo ámbito tiene lugar una iniciativa destinada a la conformación de una Red de Instructores Certificados por la CICAD, encargados de la elaboración, diseño e implementación de actividades de formación y capacitación en las agencias encargadas del cumplimiento de la ley. Tal iniciativa se desarrolló en Buenos Aires, en los meses de agosto y diciembre de 2004, con participación de las siguientes instituciones: Ministerio Público, Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional Argentina, Prefectura Naval Argentina, Policía de la Provincia de Buenos Aires, f) Administración Federal de Ingresos Públicos, g) Secretaría de Inteligencia, h) Unidad de Información Financiera.

* La Unidad de Información Financiera ha organizado jornadas de capacitación para su propio personal, en el que se trataron temas tales como el lavado de activos y sus modalidades, la delincuencia organizada transnacional, régimen

internacional en materia de prevención y control del lavado de activos de origen delictivo, la cooperación internacional en materia penal, el marco legal (Ley 25.246), la metodología de evaluación del sistema de prevención del lavado (GAFI, Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial), investigación de operaciones sospechosas y/o inusuales y ejercicios de tipologías y análisis de casos. También la Unidad organizó un jornada de trabajo con funcionarios del Ministerio Público y un taller de trabajo con oficiales de cumplimiento de las entidades financieras.

Asimismo, durante el año 2004 la UIF ha participado aportando infraestructura y capacitación en un seminario sobre prevención y control del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo auspiciado por el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE). Para el año 2005, la UIF ha ofrecido un programa de pasantías para capacitar funcionarios de los países miembros del CICTE en los temas mencionados.

* En el marco del Comité Interamericano Contra el Terrorismo de la OEA (CICTE), la Argentina ha realizado y ha ofrecido continuar realizando diversas actividades de asistencia técnica destinadas a la capacitación de funcionarios de los países miembros del Comité. En ese sentido, durante los años 2004 y 2005 se han llevado a cabo cursos de Seguridad Portuaria y Aeroportuaria, a cargo de la Prefectura Naval Argentina y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria respectivamente, con el objetivo de brindar capacitación para el cumplimiento de las normativas de OMI y OACI.

Por su parte, la Escuela Nacional de Inteligencia, que viene realizando cursos para funcionarios de países latinoamericanos, ha ofrecido a los países del CICTE participar en un curso de prevención y control del terrorismo durante el año 2005.

2.1.2. Asistencia técnica brindada por expertos argentinos:

1. La Argentina estima de fundamental importancia la labor de las Naciones Unidas en materia de asistencia técnica en materia de lucha contra el terrorismo. Al respecto, se ha colaborado activamente en las labores de capacitación legislativa, apoyando la tarea de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC) en especial, en el plano regional. Esta asistencia se ha extendido a funciones tales como la formulación de legislación y capacitación de magistrados, fiscales y otros funcionarios.

Al respecto, como ya se ha comunicado en el punto 2.3. del último informe (S/2004/323), a través de la Dirección General de Consejería Legal, el

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto ha celebrado un memorandum de entendimiento con la Sección de Prevención del Terrorismo de la UNODC, a fin de proveer asistencia técnica a los países de América Latina, por medio de un equipo interdisciplinario de expertos, que ha realizado un significativo número de prestaciones de asistencia técnica.

A tal fin, en diversas oportunidades, expertos argentinos han participado en seminarios, talleres y otras actividades realizadas en América Latina por la UNODC, conjuntamente con el Comité contra el Terrorismo de la Organización de los Estados Americanos (CICTE/OEA) y el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente.

De manera particular, dichos expertos han participado en los Seminarios Regionales, que tuvieron lugar en San José de Costa Rica, en enero y octubre de 2004 y en marzo de 2005, así como también en otras actividades de seguimiento de los mismos.

Debe tenerse presente la participación de funcionarios argentinos del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la UIF y de otros organismos en los Seminarios de Formación de Evaluadores Expertos organizados por el GAFISUD y de su experiencia internacional en la materia. Se dispone de expertos argentinos en condiciones de ofrecer capacitación a funcionarios en materia de evaluación de niveles de cumplimiento de los estándares de prevención y control del lavado de activos en países donde su desarrollo sea incipiente. Según las necesidades asociadas a cada uno de los casos que puedan presentarse se podrá ofrecer asesoramiento específico sobre cuestiones legales, financieras y operativas que hacen a la labor de los organismos de asistencia financiera.

2. En el marco del Mecanismo "3+1" (que reúne a los países que comparten la triple frontera argentino-brasileño-paraguaya y al que se invita a participar a los Estados Unidos de América) la Argentina ha ofrecido el concurso de expertos para prestar asistencia en las actividades programadas para ser llevadas a cabo durante 2005. Tales actividades son el análisis e implementación del plan de patrullaje conjunto del lago Itaipú y sus aguas adyacentes, la implementación de controles integrados de migraciones y aduanas en la llamada "zona de la triple frontera", la implementación de las recomendaciones del GAFI (40+8) y de sus recomendaciones especiales sobre el transporte transfronterizo de efectivo, el análisis por parte de las unidades de información financiera de la cuestión del desvío de dinero a través de organizaciones sin

finés de lucro y la adopción de pautas para el intercambio de información sobre vuelos de carga en la zona de la triple frontera.

2.1.3. Asistencia técnica requerida por organismos del Estado argentino:

i) Dirección Nacional de Migraciones:

En función de las medidas adoptadas (v. punto 1.2, i), a) *supra*), dicha repartición estima necesario profundizar conocimientos normativos, legales y empíricos. A tal fin, considera importante recibir seminarios, cursos, talleres, etc., en forma permanente donde se trate la problemática de la documentación fraudulenta.

ii) Banco Central de la República Argentina:

Dicha entidad ha manifestado que, a los efectos de lograr un mejor desempeño en las tareas desarrolladas por el área de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, resultaría necesario, de ser posible, contar con asistencia respecto de las siguientes cuestiones:

- Asesoramiento técnico para la generación de una base de datos consolidada con las operaciones que remitan las entidades financieras de acuerdo a la normativa actual.
- Información que permita evaluar la experiencia y los estándares internacionales a los efectos de establecer un parámetro de los perfiles de las personas (datos filiatorios, actividad, etc.) y su relación con las operaciones efectuadas y distintos productos financieros utilizados, a los efectos de posibilitar el análisis y/o detección de operaciones inusuales.
- Asistencia técnica vinculada con la transmisión y almacenamiento de la información para la generación de la base de datos, desde las entidades al BCRA (encriptación, seguridad física y lógica, capacidad de almacenamiento de datos, etc.).

iii) Superintendencia de Seguros de la Nación:

Habida cuenta de que la órbita de control de dicho organismo tiene alcance sobre todos los sujetos y productos que intervienen en el mercado asegurador, resultaría provechoso que funcionarios del mismo, puedan obtener capacitación, asistencia y entrenamiento, en la lucha contra el terrorismo, que

se brinden en el futuro, especialmente dirigidos a profundizar los métodos de investigación llevados a cabo a nivel internacional, tipos de operatorias desarrolladas en el mercado de seguros, basados en la experiencia de investigación de organizaciones lícitas o no, sean éstas comerciales o de beneficencia, y cuyo objeto sea, entre otros, coleccionar fondos para financiar a grupos terroristas internacionales.

iv) Unidad de Información Financiera:

Dicho organismo tiene interés en recibir los siguientes programas de asistencia, consignados en la página web del Comité:

** EC external assistance facilitating the implementation of UN Security Council Resolution 1373: an overview – European Commission.*

(Asistencia externa de la Comisión Europea para facilitar la aplicación de la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: reseña (Comunidad Europea))

Subprograma:

Fight against network related to terrorism

(Lucha contra redes relacionadas con el terrorismo)

** Training and Other Assistance Related to the Implementation of United Nations Security Council Resolution 1373 (United States of America).*

(Asistencia a la capacitación y otros tipos de asistencia relacionados con la aplicación de la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (Estados Unidos de América.)

Subprogramas:

– **Bureau of Diplomatic Security (State)**

– **(Dirección de Seguridad Diplomática (Departamento de Estado))**

– Course Name: Financial Underpinning of Terrorism

(Nombre del curso: Bases financieras del terrorismo)

Federal Bureau of Investigation (Justice)

(Oficina Federal de Investigaciones (Departamento de Justicia))

– Course Name: international Financial Institution Fraud

(Nombre del curso: El fraude en las instituciones financieras internacionales)

– Course Name: White Collar Crime/Financial Crimes Seminar

(Nombre del curso: Seminario sobre la delincuencia financiera y de cuello blanco)

Internacional Revenue Service (Treasury)
(Servicio de Impuestos Internos (Departamento del Tesoro))

- Course Name: Money Laundering Training
(Nombre del curso: Capacitación sobre el blanqueo de capitales)
- Course Name: Money Laundering & Financial Investigative Techniques
(Nombre del curso: Técnicas de investigación financiera y del blanqueo de capitales)
- Course Name: Training and Technique Application – Advanced
(Nombre del curso: Aplicación de la capacitación y las técnicas – nivel avanzado)

Office of Technical assistance (Treasury)
(Oficina de Asistencia Técnica (Departamento del Tesoro))

- Course Name: Principles and Techniques of Financial Investigation
(Nombre del curso: Principios y técnicas de investigación financiera)

United States Customs Service (Treasury)
(Servicio de Aduanas de los Estados Unidos (Departamento del Tesoro))

- Course Name: Money Laundering Seminar (MLS)
(Nombre del curso: Seminario sobre el blanqueo de capitales)
- Course Name: Outbound Currency Interdiction Seminar
(Nombre del curso: Seminario sobre la intercepción de la fuga de divisas)

United States Secret Service (Treasury)
(Servicio Secreto de los Estados Unidos (Departamento del Tesoro))

- Course Name: Combating Economic Fraud and Counterfeiting
(Nombre del curso: Lucha contra el fraude económico y la falsificación)
